MOVIMIENTO PRO >JUSTICIA | FUNDACIÓN MYRNA MACK | MADRES angustiadas POR NUESTROS HIJOS EXIGIMOS SEGURIDAD | FADS FAMILIARES Y AMIGOS CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL SECUESTRO

Clamor popular contra la corrupción y la impunidad

Las organizaciones que integramos el Movimiento Pro Justicia nos congratulamos por el reciente desmantelamiento de una estructura criminal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); por cuanto esto ha derivado en un contundente repudio a los abusos en que incurren gobernantes, funcionarios y empleados públicos, operadores de justicia, malos dirigentes políticos y empresariales, entre tantos otros que se enriquecen con la corrupción y la impunidad.

En un lapso muy breve, hemos visto crecer el repudio a negociaciones como las celebradas por LIDER y Patriota (entre otros partidos) para integrar la Corte Suprema de Justicia y las salas de la Corte de Apelaciones; elegir Contralor General de Cuentas y aprobar asuntos parlamentarios importantes como el presupuesto nacional, préstamos, bonos y la integración de la junta directiva del Congreso de la República; y otros negocios espurios y opacos, como el multimillonario proyecto para "limpiar" el Lago de Amatitlán.

Como consecuencia, se ha consolidado el apoyo a las acciones del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que en conjunto han expuesto y desmantelado estructuras criminales en el Sistema Penitenciario y la SAT; bandas criminales como la de Mendoza; así como prácticas de corrupción y enriquecimiento ilícito en el Poder Judicial, entre ellos los casos contra la jueza Jisela Reinoso y el magistrado Erick Santiago.

En virtud de lo anterior, compartimos los siguientes planteamientos:

1. Recibimos con beneplácito la prórroga del mandato de la CICIG. Corresponde a la sociedad apoyar y exigir que la comisión ejecute su mandato en forma plena, sin más restricciones que las impuestas por la Constitución de la República y las leyes vigentes en el país.

2. Las instituciones de justicia y seguridad deben garantizar una plena cooperación con la CICIG para que los esfuerzos conjuntos no caigan en el vacío ni sean saboteados. Las instituciones tienen la obligación de desempeñarse con eficiencia, imparcialidad, legalidad e independencia frente de los grupos de poder.

3. Invitamos a valorar el trabajo de los buenos jueces que promueven el imperio de la ley y el irrestricto respeto al debido proceso, aun cuando esto desate en su contra persecución por parte de los criminales y el por el Estado mismo. En contraposición a eso, exigimos que sean sancionadas las autoridades que obstruyen la justicia y subastan los principios de independencia y autonomía inherentes a su cargo y función. Es indispensable investigar y sancionar conforme a Derecho todo acto espurio.

4. Demandamos que el Congreso de la República asuma sus indelegables responsabilidades políticas y legales, y exija al Poder Ejecutivo las respuestas políticas y operativas necesarias para afrontar la crisis, de la cual es el principal responsable y causante.

5. En relación con los casos de corrupción y defraudación aduanera, exhortamos al MP y a la CICIG a profundizar y ampliar la investigación, sin importar qué grupos, sectores o personajes resulten implicados.

6. Demandamos al Presidente de la República solicitar un nuevo proceso de postulación de candidatos a integrar el Directorio de la SAT, y que las nominaciones se realicen siguiendo los principios rectores de la Ley de Comisiones de Postulación. Es importante que, en el marco del rescate de la SAT, el Directorio esté integrado por profesionales cuyo proceso de nominación no haya estado expuesto a la influencia de grupos criminales como el desmantelado recientemente.

7. Alentamos al Tribunal Supremo Electoral, el MP y la CICIG a unir esfuerzos contra las estructuras criminales que han penetrado casi todo el sistema político del país; a efecto de depurar el proceso electoral del financiamiento de origen ilícito y toda injerencia que signifique a futuro una mayor cooptación delincuencial del poder público.

Compartimos la indignación de la sociedad guatemalteca por la impunidad, la corrupción y el crimen que afecta el ejercicio del poder público; saludamos la expresión ciudadana pacífica de repudio a los corruptos y nos sumamos a los esfuerzos por exigir en estas elecciones la construcción de un mejor rumbo para Guatemala.

Guatemala, 28 de abril de 2015